



RESOLUCIÓN No. No 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

EL SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En uso de las facultades legales, en especial de las conferidas por los artículos 50 y 73 del Código Contencioso Administrativo, 37 del Decreto Nacional 564 de 2006, 1º del Decreto 191 de 2006 y 4 literal n ) del Decreto Distrital 550 de 2006 y,

CONSIDERANDO

- I.- Que la sociedad **INVERSIONES LIBOS & CIA LTDA S. EN C.** representada legalmente por la sociedad **INVERSIONES LIBOS & CIA LTDA** como socio gestor, y esta a su vez representada legalmente por el señor **JOSE LIBOS SAAD**, identificado con la cédula de ciudadanía 19.054.377, solicitó ante la Curaduría Urbana 5 de Bogotá, por medio de la radicación 05-5-1753 de octubre 14 de 2005, licencia de construcción en la modalidad de modificación y demolición parcial para el predio localizado en la AC 85 7-13, Urbanización El Retiro, de la Alcaldía Local de Chapinero.
- II.- Que 13 de diciembre de 2005, el Curador Urbano 5 de Bogotá D.C. concedió la Licencia de Construcción en la modalidad de modificación LC 05-5-1346 para el predio ubicado en la AC 85 7-13, Urbanización El Retiro, de la Alcaldía Local de Chapinero.
- III.- Que la H. Concejal **LARIZA PIZANO ROJAS**, mediante radicación 1-2006-35695 del 2 de octubre de 2006, presentó ante el entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital (hoy Secretaría Distrital de Planeación, SDP), solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción en la modalidad de modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005.
- IV.- Que el 26 de octubre de 2006 mediante auto, la Subdirección Jurídica dio inicio al trámite de revocatoria directa, convocó a los titulares del acto administrativo cuestionado, dispuso remitir el expediente a la Subdirección de Planeamiento Urbano con el fin de solicitarles lo antecedentes y estudios existentes respecto de la mencionada Licencia de Construcción así mismo para que realizara el estudio técnico correspondiente de acuerdo a los argumentos expuestos por la Concejal de Bogotá D.C. **LARIZA PIZANO ROJAS**.
- V.- Que el 26 de diciembre de 2006, la Comisión de Veeduría a las Curadurías Urbanas de Bogotá D.C., solicitó la revocatoria directa de la Licencia de Construcción LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005.



Continuación de la Resolución No No 0 2 4 3

5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

VI.- Que el 9 de enero de 2007, la Subsecretaría Jurídica mediante Auto Adicional resolvió:

*"(...)PRIMERO: Acumular en una misma actuación administrativa las solicitudes de revocatoria directa presentadas por la CONCEJAL DE BOGOTÁ D.C. LARIZA PIZANO ROJAS y la COMISIÓN DE VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS URBANAS DE BOGOTÁ D.C. de la licencia de construcción No. LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005.*

*SEGUNDO: Solicitar a la Dirección de Operaciones Estratégicas concepto sobre las cuestiones técnicas planteadas por la COMISIÓN DE VEEDURÍA A LAS CURADURÍAS URBANAS DE BOGOTÁ D.C. en la solicitud de revocatoria directa.(...)"*

VII- Que el 14 de septiembre de 2007, se expidió el Decreto Distrital 423, "Por el cual se decide una manifestación de impedimento del Secretario Distrital de Planeación dentro del trámite de la solicitud de revocatoria directa de la licencia de construcción No. LC 05-5-1346 de 2005", se designo como Secretario Distrital de Planeación Ad-Hoc, al doctor Germán Darío Rodríguez, Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, para efectos de decidir la solicitud de revocatoria directa interpuesta por la Concejal de Bogotá D.C. LARIZA PIZANO ROJAS, contra la licencia de construcción LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005.

VIII- Que mediante radicación SDP 2-2007-29411, la Secretaría Distrital de Planeación envió al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público el expediente contentivo de la solicitud de revocatoria directa solicitada por la Concejal de Bogotá D.C. LARIZA PIZANO ROJAS

IX- Que el 26 de diciembre de 2007, el Secretario Distrital de Planeación Ad-Hoc expidió la Resolución 1034 por la cual se revocó la Licencia de Construcción para modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005, expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá D.C. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C. (folios. 202 a 215)

X- Que el 16 de enero de 2008, el señor JOSE FERNANDO PAREDES en representación de la doctora MARGARITA MARÍA PÉREZ M. apoderada de la sociedad INVERSIONES LIBOS & CIA. LTDA. S. en C., se notificó personalmente de la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Ad-Hoc (folio 199)

XI- Que el 23 de enero de 2008, mediante escrito con radicación SDP 1-2008-02707 el doctor FERNANDO A. TREBILCOK BARVO, en su calidad de apoderado de la sociedad INVERSIONES LIBOS Y CIA TDA, la cual a su vez representa a la sociedad INVERSIONES LIBOS & CIA LTDA S. EN C. interpuso recurso de reposición contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Ad-Hoc (folios 217 a 234)



Continuación de la Resolución No No 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

**XII-** Que el 1° de febrero de 2008, el Director de Trámites Administrativos (E) mediante oficio con radicación SDP 2-2008-03313 remitió al doctor GERMAN DARÍO RODRÍGUEZ el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007, en cumplimiento a la designación efectuada mediante el Decreto Distrital 423 de 2007 *"Por el cual se decide una solicitud de impedimento del Secretario Distrital de Planeación y se designa Secretario Ad hoc"*(folio 237).

**XIII-** Que mediante oficio con radicación SDP 1-2008-08497 del 27 de febrero de 2008, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, devolvió a la Subsecretaría Jurídica de esta entidad el expediente contentivo del recurso de reposición interpuesto por el doctor FERNANDO A. TREBILCOK BARVO contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Ad-Hoc, argumentando la falta de competencia del doctor GERMAN DARÍO RODRIGUEZ Director del Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público para resolver el asunto. (folio 238)

**XIV-** Que el 13 de marzo de 2008, la Subsecretaria Jurídica (E) de la Secretaría Distrital de Planeación mediante escrito con radicación SDP 2-2008-08142, remitió nuevamente el recurso de reposición interpuesto por el doctor FERNANDO A. TREBILCOK BARVO contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 al doctor GERMAN DARÍO RODRÍGUEZ Director del Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público, por considerar que el funcionario que ostenta la competencia legal para resolver el mencionado recurso, no era otro que aquel que expidió el acto administrativo recurrido, en este caso, el Secretario Distrital de Planeación Ad-Hoc.

**XV.** Adicionalmente, indicó que si bien es cierto el Decreto Distrital 423 del 14 de septiembre de 2007, designó un Secretario Distrital de Planeación Ad-Hoc, para efectos de decidir la solicitud de revocatoria directa interpuesta por la Concejal LARIZA PIZANO ROJAS, no es menos cierto, que dicha facultad comprende además la de resolver todas aquellas solicitudes que presenten los ciudadanos en ejercicio de la vía gubernativa, es decir, al funcionario Ad-Hoc, no sólo le corresponde la expedición del acto administrativo, sino que debe asegurar la ejecutoria y firmeza de la decisión por él adoptada. (folio 240).

**XVI-** Que mediante oficio con radicación SDP 1-2008-11490 del 17 de marzo de 2008, DADEP 2008EE3058, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, insistió en la devolución del recurso de reposición interpuesto por el doctor FERNANDO A. TREBILCOK BARVO contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Ad-Hoc (folios 241 a 243)

**XVII-** Que el 16 de agosto de 2007, mediante oficio con radicación 2-2007-25237, el Secretario



Continuación de la Resolución No No 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

Distrital de Planeación arquitecto FERNANDO ARTURO ROJAS ROJAS solicitó al Alcalde Mayor de Bogotá separarlo del conocimiento del trámite de revocatoria directa adelantado contra la licencia de construcción LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005, por considerarse estar inmerso en una causal de impedimento (folios 152 y 153).

**XVIII-** Que el 2 de mayo de 2008, conforme al radicado SDP 2-2008-19121, el Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante comunicación 2-2008-21839 (folio 251), resolvió el conflicto negativo de competencias respecto de la decisión del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 de 2007, en el sentido de determinar que "...corresponde al Secretario Distrital de Planeación, resolver el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad INEVRSIONES LIBOS & CIA Ltda. S en c., en contra de la Resolución 1034 de 2007 expedida por el Director del DADEP, en su calidad de Secretario Distrital de Planeación Ad-hoc.." (folios 245 a 251).

### RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO

Conforme a lo anterior, este Despacho entrará a decidir el recurso reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007, expedida por el doctor Germán Darío Rodríguez Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc.

#### 1. Requisitos para la interposición del recurso de reposición

##### a) Oportunidad.

Al respecto se observa que el recurso de reposición fue presentado de manera oportuna, de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo<sup>1</sup>, toda vez que la expedición de la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007, fue notificada personalmente el 16 de enero de 2008 al señor JOSE FERNANDO PAREDES en representación de la doctora MARGARITA MARÍA PÉREZ, apoderada de la sociedad INVERSIONES LIBOS & CIA LTDA. S en C. (folio 199)

Así mismo, el 23 de enero de 2008 mediante escrito con radicación SDP 1-2008-02707, el doctor FERNANDO A. TREBILCOK BARVO, interpuso personalmente recurso de reposición

<sup>1</sup> C.C.A. "Art. 51.- Oportunidad y presentación. De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. (...)"



Continuación de la Resolución No No 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Ad-Hoc (folios 217 a 234).

**b) Procedencia.**

El recurso de reposición presentado es procedente en los términos del artículo 4° de la Resolución 1034 de 2007.

**2. Argumentos del recurrente**

Los planteamientos esgrimidos por el libelista en el recurso de reposición, en síntesis son los siguientes:

- A la luz de lo establecido en el artículo 36 del Decreto Nacional 1600 de 2005, sólo se atribuyó competencia para decidir sobre solicitudes de revocatoria directa al Curador Urbano y al funcionario que expidió el acto administrativo. La expedición de los Decretos Distritales 449 de 2005 y 191 de 2006 y el Decreto Nacional 564 de 2006 son posteriores a la licencia de construcción cuestionada; en consecuencia, en correcta hermenéutica constitucional y jurídica, la competencia asignada a la Secretaría Distrital de Planeación por dichas normas entra a regir solamente frente a los actos administrativos que se expidan a futuro y con posterioridad a su entrada en vigencia, no de manera retroactiva, por lo que estos Decretos no son aplicables al presente caso.
- En el mismo sentido, manifiesta que tanto a la H. Concejal LARIZA PIZANO ROJAS, como a la COMISIÓN DE VEEDURÍAS A LAS CURADURÍAS URBANAS, no les asistía ni les asiste hoy legitimación en la causa por activa para impetrar la solicitud de revocatoria.
- Añade, que mal puede revocarse un acto administrativo cuando el mismo ha desaparecido de la vida jurídica toda vez que lo autorizado en el acto administrativo ya se ejecutó. Aunado a lo anterior se encuentra la circunstancia contundente de que cuando el Estado notificó la decisión revocatoria, ya habían transcurrido los veinticuatro meses de vigencia del permiso, lo que conlleva al silogismo de que no puede revocarse lo que no existe.
- Argumenta además, que ninguna tipificación penal se esgrimió como sustento de la revocatoria decidida, ni mucho menos ha habido pronunciamiento jurisdiccional de autoridad competente en el ámbito penal, por lo cual simplemente la interpretación realizada está desprovista de la objetividad constitucional correspondiente ni existe prueba legalmente recaudada que sea manifiesta, idónea, conducente o pertinente para advertir tal ilegalidad.



Continuación de la Resolución No Nº 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

- Concluye que, de aceptarse lo decidido en la resolución recurrida, se estaría desconociendo per se la decisión judicial proferida el 16 de abril de 2007 por la Sala de Decisión Civil del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la Acción Popular 2006-0401 y dentro de la cual los mismos argumentos que aquí denuncian los solicitantes de revocatoria fueron expuestos al solicitar una medida cautelar, decisión que está revestida de plena legalidad, y en consecuencia debe ser respetada por todas las autoridades.

**3. Análisis de los hechos y fundamentos de derecho.**

**3.1 En cuanto a la falta de competencia legal para revocar el acto administrativo particular.**

Al respecto, este Despacho considera que si bien es cierto, para la fecha de expedición de la Licencia de Construcción en la modalidad de Modificación LC 05-5-1346, esto es, el 13 de diciembre de 2005, aún no habían sido expedidos los Decretos Distritales 449 de 2005<sup>2</sup> y 191 de 2006<sup>3</sup>, ni tampoco el Decreto Nacional 564 de 2006<sup>4</sup>, no lo es menos, que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en pronunciamiento del 2 de junio de 2005 con ocasión de la consulta realizada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, determinó que *"Las oficinas de planeación o en su defecto los alcaldes, municipales o distritales, son competentes para resolver las peticiones de revocatoria directa de los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos otorgan o niegan licencias urbanísticas."*

En efecto, el Alto Tribunal arribó a esta conclusión después de analizar la naturaleza jurídica de las curadurías urbanas, de sus actos y de la figura de la revocatoria directa, acudiendo a teorías del derecho administrativo moderno como la de los niveles jerárquicos estructurales y funcionales en la administración.

Además afirma la Sala, que en tratándose de la administración directa, el concepto de superior inmediato tiene una connotación estructural y orgánica, mientras que en la denominada administración por colaboración, el concepto de superior inmediato posee una clara condición funcional, de manera que en el caso específico del curador urbano, quien no es funcionario y por lo tanto no tiene inmediato superior en términos orgánicos, en relación con sus actos *"...el artículo 69 de C.C.A. debe leerse con sentido funcional, que no estructural, teniendo en cuenta la defensa de los intereses de los administrados y la realización del principio universal de la seguridad jurídica."*

<sup>2</sup> Publicado en el Registro Distrital 3457 del 21 de diciembre de 2005

<sup>3</sup> Publicado en el Registro Distrital 3555 del 8 de junio de 2006

<sup>4</sup> Expedido el 29 de diciembre de 2006



Continuación de la Resolución No No 0243 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

De acuerdo a lo anterior, considera esa Corporación que "...cuando la ley 388 de 1.997 y su decreto reglamentario concibieron la posibilidad de revocatoria directa de los actos de los curadores, sometiendo esta figura a las normas del Código Contencioso Administrativo, la interpretación de contexto o lo que llaman los autores españoles, el metalenguaje de la norma, indica que el Curador es competente para revocar sus propios actos, y que las oficinas de planeación o en su defecto los alcaldes son los "inmediatos superiores" funcionales ante quienes también se puede solicitar la revocación directa de los actos de los curadores, habida consideración de la facultad que les otorga la ley para vigilar y controlar el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de estos."

Por otra parte, se tiene que el trámite de revocatoria directa de la Licencia de Construcción LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005, iniciado mediante auto el 26 de octubre de 2006 con ocasión de la solicitud efectuada por la H. Concejal LARIZA PIZANO ROJAS, debe regirse íntegramente por las normas procedimentales establecidas en el Decreto Nacional 564 de 2006 y en consecuencia el Secretario Distrital de Planeación Ad-hoc tenía competencia para resolver el asunto.

Dicha norma establece en el parágrafo 1º artículo 37, que contra los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos otorguen o nieguen licencias urbanísticas, procede la revocatoria directa ante el mismo curador o ante el alcalde municipal o distrital o su delegado, en los términos previstos en el Título V de la Parte Primera del Código Contencioso Administrativo.

Esta disposición por tratarse de una norma de procedimiento, es de orden público y por ende de inmediata aplicación.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en providencia del 12 de marzo de 2002<sup>5</sup> expresó:

"(...)

En materia procesal -no obstante- el principio se invierte: la regla general es que la aplicación de la ley procesal en el tiempo es inmediata, debido al carácter público de la misma, y que la ley nueva rige los procedimientos que se han iniciado bajo la vigencia de la ley anterior; excepto las diligencias, términos y actuaciones que hayan comenzado a correr o a ejecutarse bajo la vigencia del régimen derogado.

<sup>5</sup> Sentencia C-181/02, Referencia: expediente D-3676, Magistrado Sustanciador Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA



Continuación de la Resolución No Nº 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

*En efecto, la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que la regla básica en este campo es la de la aplicación inmediata de las normas procesales, ya que el diseño de los trámites a que debe someterse una discusión jurídica no es asunto que incida necesariamente en el contenido del derecho sustancial, por lo que su alteración no modifica la intangibilidad de los derechos adquiridos, protegida constitucionalmente en el artículo 58 de la Carta.*

(...)" (subrayado y negrilla fuera de texto)

En cuanto a la legitimidad de la Concejala LARIZA PIZANO ROJAS y de la COMISIÓN DE VEEDURÍAS A LAS CURADURÍAS URBANAS, es preciso anotar que tanto para la fecha de expedición de la licencia de construcción cuestionada, como para el momento del trámite de revocatoria directa que nos ocupa, es aplicable el artículo 4º de la Ley 388 de 1997, en virtud del cual la participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento y **en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos.**

Debe resaltarse, que la aplicación del principio de participación democrática es relevante para cualquier actuación de orden urbanístico, incluido el otorgamiento de licencias urbanísticas, así como los procesos de revocatoria directa en que estas se encuentren cuestionadas.

Es importante agregar, que en el trámite y expedición de la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 se dio estricta aplicación al principio de la participación democrática establecido en el artículo 4º de la Ley 388 de 1997 y se cumplió a cabalidad el procedimiento previsto en los artículos 28 y concordantes del Código Contencioso Administrativo, garantizando de esta forma la intervención y derecho de defensa del titular de las licencias y de los terceros interesados.

En el mismo sentido, el artículo 77 del Decreto Nacional 1052 de 1998, igualmente vigente para la fecha de la licencia de construcción bajo examen, prescribe que corresponde a las comisiones de veeduría interponer, a través de uno de sus miembros, los recursos y acciones contra las actuaciones de los curadores que no se ajusten a la normatividad urbanística, y si fuera del caso, formular las correspondientes denuncias.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, no pueden ser acogidos los argumentos del impugnante en torno a la falta de legitimidad de los solicitantes de la revocatoria directa y de esta Secretaría para resolver la solicitud.





Continuación de la Resolución No No 0243 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

**3.2 En cuanto a la naturaleza, vigencia y agotamiento del acto administrativo particular objeto de revocatoria.**

Sobre el particular, es preciso mantener el criterio expresado por este Despacho en diferentes decisiones, que sostiene que las licencias urbanísticas son actos administrativos que no sólo autorizan a los titulares la realización de obras de urbanización o de construcción, en las condiciones y términos previstos en el respectivo instrumento y que en el caso que nos ocupa era de veinticuatro meses, prorrogables hasta por doce meses más, sino también configuran en relación con ellos unos derechos y obligaciones frente a la propia administración y ante terceros, como garantía de que las obras ejecutadas, se han efectuado conforme a la normatividad urbanística vigente para la zona o sector en la que se ubica el predio objeto de licenciamiento.

En consecuencia, resulta necesario diferenciar entre el plazo para la realización de las obras en un período determinado y, la vigencia misma del acto como sustrato legal de la actuación reglada que ha concedido autorización al particular para urbanizar o construir. En el primer caso, es claro que si ocurre el vencimiento del plazo concedido o de su prórroga, y no se han ejecutado las obras, ya no puede el particular realizarlas bajo el amparo de la licencia, sin incurrir en una eventual infracción urbanística; empero si las obras se construyeron dentro del plazo, no puede válidamente argumentarse que por el hecho haberse ajustado el particular a los términos permitidos, la licencia haya perdido vigencia y validez.

Adicionalmente a lo expuesto, no tendría explicación la previsión señalada en el artículo 99 de la Ley 388 de 1997, cuando expresa: *"Al acto administrativo que otorga la respectiva licencia le son aplicables en su totalidad las disposiciones sobre revocatoria directa establecidas en el Código Contencioso Administrativo."*, ya que de haberse previsto en la norma una vigencia para la totalidad de los efectos de las licencias, resultaría inocua e improcedente la posibilidad de revocar este tipo de actos administrativos, en la medida en que solo bastaría esperar como máximo 36 meses para que se produjera la pérdida de fuerza ejecutoria y al mismo tiempo, todos los derechos que en relación con las obras debidamente ejecutadas y dentro de los términos para ello establecidos, se hubieran radicado en cabeza de su titular.

**2.3 En cuanto a la inexistente potestad revocatoria del acto administrativo.**

Frente a este argumento, es importante recalcar que en relación con la posibilidad de revocar actos administrativos que tengan efectos particulares y concretos, el artículo 73<sup>6</sup> del C. C. A. expresa que

<sup>6</sup> "ARTÍCULO 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales." (Negrillas y subrayas fuera



Continuación de la Resolución No No 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

tales actos no pueden ser objeto de revocatoria, sin contar con el consentimiento expreso y escrito de sus titulares; sin embargo, el inciso segundo del citado artículo, por excepción, prevé esa posibilidad sin el precitado beneplácito, en los siguientes eventos:

- Cuando resulte de la aplicación del silencio administrativo positivo<sup>7</sup>, si se dan las causales previstas en el artículo 69<sup>8</sup> del C. C. A.

- Si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

En relación con las excepciones consagradas en el inciso segundo del artículo 73 del C.C.A, la Jurisprudencia unificada del Consejo de Estado mediante sentencia de interés jurídico<sup>9</sup>, expresó:

"(...)

*La interpretación que hizo la Sala del artículo 73 del C. C. A. sólo contempló la posibilidad que tienen las autoridades de revocar los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento del particular, cuando se derive del silencio administrativo positivo, planteamiento que revisa la sala en esta oportunidad, pues una nueva lectura del citado artículo 73 del decreto 01 de 1984 permite ampliar el alcance que otrora (sic) señaló esta corporación y llegar a una conclusión diferente.*

(...)

*Nótese que en el inciso 2º de dicha norma, el legislador empleó una proposición disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la puntuación de su texto. Pero además como se observa en este mismo inciso 2º y en el 3º, el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión "actos administrativos", para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna.*

*Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la*

de texto).

<sup>7</sup> Previsto en el artículo 41 del C. C. A.: "**ARTÍCULO 41.** Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. ... Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir del día en que se inició la actuación. ... El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las condiciones que señalan los artículos 71, 73 y 74." (Negritas y subrayas fuera de texto)

<sup>8</sup> "**ARTÍCULO 69.** Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: ... 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. ... 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. ... 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."

<sup>9</sup> Consejo de Estado - Consejero Ponente Dra.: ANA MARGARITA OLAYA FORERO - Fecha: Julio 16 de 2002- No. de Rad.: IJ-029-02.



Continuación de la Resolución No No 0243 5 FEB 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

*aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales.*

*Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del C. C. A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la ley.*

*La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de responsabilidad para su acatamiento.*

*(...)*

*Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, éste debe provenir de una causa eficiente, como quiera que si esa causa no es eficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El medio pues tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su consentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por esa vía es por lo que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal acto, sin consentimiento del particular afectado, previa la tramitación del procedimiento señalado en el artículo 74 del C.C.A.*  
*(...)"*

De la lectura del extracto transcrito, puede inferirse que es claro que aunque nuestra legislación consagra el principio de inmutabilidad de los actos de contenido particular y concreto, la administración ostenta la facultad de retirar del ordenamiento jurídico los actos de contenido particular y concreto, sin el consentimiento escrito y expreso de su respectivo titular, restringida estrictamente a la ocurrencia de dos (2) supuestos de hecho:

1. Cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69.
2. Si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales

En el segundo evento, es decir cuando el acto ocurre por medios ilegales, de conformidad con los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales, debe tratarse de una maniobra fraudulenta, de una abrupta, abierta e incontrovertible actuación ilícita, debidamente probada, cuya persistencia implique



## Continuación de la Resolución No

No 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

grave y actual quebranto al orden jurídico. Luego entonces, no se trata de situaciones en las cuales la autoridad pública pueda intuir o sospechar la ilegalidad de los medios usados para obtener o provocar el acto administrativo que se revoca, ni tampoco del acto inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69 del C. C. A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la Constitución o la Ley.

El principio de inmutabilidad o intangibilidad de los actos administrativos de contenido subjetivo consagrado en el artículo 73 del CCA, encuentra su fundamento en el principio de seguridad jurídica, en el respeto de los derechos adquiridos, en la presunción de legalidad y en el principio de buena fe que debe reinar en las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Sólo cuando es evidente el despliegue de una conducta ilícita, que además de romper con la legalidad del acto, haya defraudado la buena fe que se presume en el obrar del particular frente a la administración, podrá ésta, aún sin el consentimiento escrito y expreso de aquel, invalidar el acto y retirarlo del mundo jurídico, ya que en este evento es claro que no habrá lugar a la consolidación de derechos, ni tampoco a la protección de la confianza legítima.

Corolario de lo anterior, la Administración solamente puede revocar un acto administrativo sin el consentimiento expreso y escrito del titular de los derechos de carácter particular y concreto reconocidos en él, cuando del estudio de la actuación administrativa se infiera sin lugar a dudas que la expedición del acto ocurrió por alguno de los vicios de la voluntad, esto es, error, fuerza o dolo, bien que recaiga sobre el objeto de la actuación o respecto de cualquiera de los sujetos que en ella intervinieron.

Esta tesis fue igualmente implementada por el Consejo de Estado en la Sentencia Rad. 76001-23-24-000-1998-1688-01-13316, Consejero Ponente Germán Ayala Mantilla SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA, del 11 de marzo de 2004.

También la Corte Constitucional en abundante jurisprudencia, ha precisado que ante el acto administrativo de carácter particular y concreto, obtenido con base en actuaciones fraudulentas, la administración tiene la facultad de revocarlo directamente, sin el consentimiento del particular:

- Fallo proferido el 28 de junio de 2001 en el proceso mediante el cual se examinó la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 5 de la Ley 190 de 1995:

"(...)

*Es decir que para esta Corporación, atendiendo el principio de buena fe y la presunción de legalidad que ostentan los actos de la administración, amen de tener en cuenta razones de seguridad jurídica y de respeto a las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona*



Continuación de la Resolución No Nº 0243 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

*mediante decisiones en firme, salvo una evidente violación del ordenamiento jurídico, un acto de carácter particular y concreto solo podrá ser revocado con el consentimiento expreso del particular.*

*En una circunstancia de manifiesta ilegalidad, sin embargo, la aplicación del principio de buena fe deberá operar es en beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias.*

*El acto administrativo que así lo declare deberá en todo caso hacer expresa mención de dicha circunstancia y de la totalidad de los elementos de juicio que llevaron al convencimiento de la administración, lo cual implica necesariamente la aplicación de un procedimiento que permita a la Administración reunir dichos elementos de juicio.*

*Al respecto la Corte constata que de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, ya sea que la revocatoria proceda con o sin el consentimiento del particular, ésta está sometida en todo caso al procedimiento establecido en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo*

*(...)" (subrayado fuera de texto)*

En síntesis, según la tesis desarrollada jurisprudencialmente, es posible para la Administración la revocatoria de los actos administrativos de carácter particular y concreto sin el consentimiento de su respectivo titular, cuando sea evidente que el acto ocurrió por medios ilegales, teniendo en cuenta las siguientes connotaciones:

- Se trate de eventos en que la expresión de la voluntad del Estado haya nacido viciada por violencia, error o dolo.
- La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado. Ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, que haya ocurrido de manera ilícita puede considerarse como factor de responsabilidad para su acatamiento.
- El hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración, del administrado o de un tercero, pues en eso la Ley no hace diferencia.
- El medio debe ser eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, éste debe provenir de una causa eficiente.



Continuación de la Resolución No No 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

- Debe adelantarse previamente, el procedimiento establecido en el artículo 74 del C.C.A.<sup>10</sup>
- La ocurrencia de medios ilegales debe ser debidamente probada.

Tal y como puede observarse, tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como la de la Corte Constitucional, han sido unívocas al considerar que ante la existencia de medios ilegales o ante la presencia de una abrupta, abierta e incontrovertible actuación ilícita, la administración debe proceder a la revocatoria unilateral del acto administrativo particular y concreto, aún sin el consentimiento de su respectivo titular, sin que dicha decisión se encuentre obligatoriamente y en todos los casos supeditada a un pronunciamiento judicial previo, ni tampoco a la existencia de una tipificación penal.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional invocada por el memorialista se refiere a un evento de excepción de inconstitucionalidad, el cual no es pertinente en el sub-lite, pues en la decisión no se hace alusión alguna a esta figura, en tanto que la situación tratada en la sentencia C-385 del 23 de septiembre de 2003, denota aquellos casos en los cuales la conducta del particular se tipifica como delito, caso en el cual la administración se encuentra habilitada para revocar el acto administrativo subjetivo. Sin embargo, esta tesis no está restringiendo exclusivamente a la ocurrencia de conductas penalmente tipificadas la revocatoria unilateral por parte de la administración de un acto de contenido particular y concreto, ni tampoco hace referencia a la obligatoriedad de un pronunciamiento judicial penal previo para proceder en ese sentido.

En el caso de la Licencia de Construcción en la modalidad de Modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005, expedida por el Curador Urbano 5 de Bogotá D.C., es preciso entrar a determinar la ocurrencia de medios ilegales en la obtención del acto administrativo, acudiendo a la teoría aceptada jurisprudencialmente de los vicios del consentimiento.

Según el artículo 1508 del Código Civil *"los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo"*.

Vicios que en materia de actuaciones administrativas, técnicamente no deben ser señalados como *"del consentimiento"*, sino **"de la voluntad"** en la medida que como lo señala la doctrina "...

<sup>10</sup> "ARTÍCULO 74. Procedimiento para la revocación de actos de carácter particular y concreto. Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este código. En el acto de revocatoria de los actos presuntos obtenidos por el silencio administrativo positivo se ordenará la cancelación de las escrituras que autoriza el artículo 42 y se ordenará iniciar las acciones penales o disciplinarias correspondientes.

*El beneficiario del silencio que hubiese obrado de buena fe, podrá pedir reparación del daño ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo si el acto presunto se revoca."*



Continuación de la Resolución No No 0243 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

*la voluntad exenta de vicios... es... elemento primordial de todo acto jurídico que, en tratándose de negocios, toma el nombre de consentimiento, el término voluntad es genérico, consentimiento específico. ... generalmente se le denomina vicios del consentimiento (art. 1508); pero, se repite, es más conforme con la técnica llamarlos vicios de la voluntad, toda vez que pueden afectar no sólo la que concurre con otras a la formación de un negocio, sino la única de los actos unilaterales, en donde no puede decirse, con propiedad, que haya consentimiento. ...<sup>11</sup>*

En reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre la naturaleza del error, la distinción entre error de hecho y de derecho y sus diversas clasificaciones:

"(...)

**ERROR DE HECHO Y DE DERECHO:** *En el primer tipo de error se incurre cuando se desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, bien porque se supone el medio inexistente, se pretermite el existente o se le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido objetivo, alterándolo. El error de derecho se presenta, en cambio, cuando el juez quebranta las normas legales que se ocupan de regular el régimen de producción, eficacia o evaluación de la prueba, o sea cuando infringe preceptos de disciplina probatoria. Esta segunda clase de error se da en la contemplación jurídica de la prueba, teniendo suceso cuando el juez aprecia pruebas aducidas sin la observancia de los requisitos legales, o cuando no las evalúa por considerar que fueron ilegalmente incorporadas, o cuando les asigna mérito probatorio que la ley prohíbe para el caso, o les niega el que si les confiere, o da por demostrado un hecho con prueba inconducente, o exige para el efecto una prueba específica que la ley no requiere.*

(...)<sup>12</sup> (Negritas y subrayas fuera de texto)

**ERROR DE HECHO-Modalidades**

**El error de hecho tiene, de suyo, una doble connotación, pues bien suele presentarse frente al contenido material de la prueba o respecto de la aplicación de las reglas de la sana crítica, ya que mientras en la primera se hace decir lo que en realidad no dice, se ignora o supone, en la segunda, los juicios apreciativos del sentenciador pugnan con los principios de la lógica y la experiencia al punto de tornarse absurdos y arbitrarios.**

(...)

<sup>11</sup> ERNESTO CEDIEL ANGEL- Ineficacia de los Actos Administrativos – Gráficas Salesianas – Bogotá D. C.

<sup>12</sup> Magistrado: JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ GÓMEZ - SALA DE CASACION CIVIL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Número de Radicación: 4981



Continuación de la Resolución No No 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

*Los errores de la sentencia pueden ser:*

**3.4.1. De hecho.**

*En primer lugar, por falso juicio de existencia, que se presenta cuando el fallador ignora, desconoce u omite el reconocimiento de la presencia de una prueba procesalmente válida (falta de apreciación de la prueba), o cuando supone o imagina un hecho porque cree que la prueba obra en el proceso, es decir, cuando reconoce un hecho carente de demostración (falsa apreciación de la prueba).*

*En segundo lugar, por falso juicio de identidad, que surge si el Juez tergiversa, distorsiona, desdibuja o desfigura el hecho que revela la prueba, con lo cual se da a esta un alcance objetivo que no tiene, ya porque se le quita una parte al hecho, ya porque se le agrega algo o ya, finalmente, porque se lo sectoriza, parcela o divide.*

*Y en tercer lugar, por error de apreciación, que se presenta cuando el Juez realiza una valoración equivocada de los hechos en sí mismos, objetivamente vistos, y plasma en la sentencia inferencias erróneas por inexacta observación de los elementos de la sana crítica, es decir, de la lógica, de la ciencia o de la experiencia*

*(...)"*

Así las cosas, el error de hecho puede configurarse frente al contenido material de la prueba o frente a la aplicación de las reglas de la sana crítica.

El primer caso, se presenta cuando el sentenciador infiere de una prueba algo que en realidad no quiere decir, supone o ignora. En el segundo caso, la valoración de las pruebas que se realiza riñe con la sana crítica, la lógica y la experiencia.

A su vez, el error de hecho puede presentarse en tres eventos:

- ***Por falso juicio de existencia.*** Tal como lo indican los referentes jurisprudenciales transcritos, las dos modalidades de este tipo de error, son:

*Falta de apreciación de la prueba, que se configura cuando el encargado de una actuación ignora, desconoce u omite el reconocimiento de la presencia de una prueba procesalmente válida.*

*Falsa apreciación de la prueba, que se configura cuando el encargado de una actuación supone o imagina un hecho porque cree que la prueba obra en el proceso, es decir, cuando reconoce un hecho carente de demostración.*





Continuación de la Resolución No No 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

- **Por falso juicio de identidad.** En este evento, el encargado de una actuación, tergiversa, distorsiona, desdibuja o desfigura el hecho que revela la prueba, dándole un alcance objetivo que no tiene, ya porque se le quita una parte al hecho, ya porque se le agrega algo o ya, finalmente, porque se lo sectoriza, parcela o divide.
- **Por error de apreciación.** Se configura esta situación cuando el operador de la norma realiza una valoración equivocada de los hechos en sí mismos, objetivamente vistos, y plasma en su actuación inferencias erróneas por inexacta observación de los elementos de la sana crítica, es decir, de la lógica, de la ciencia o de la experiencia

**2.3.2 El Caso concreto.**

En el caso concreto de la revocatoria directa de la Licencia de Construcción en la modalidad de Modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005, por parte del Secretario Distrital de Planeación Ad-Hoc., de acuerdo con los hechos descritos en el numeral 2.4 literal b de la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 el medio ilegal se concreta en la declaración juramentada efectuada por el representante legal de la sociedad INVERSIONES LIBOS Y CIA LTDA (folio 40) y en la cual manifiesta que:

"(...)

*PRIMERO: Mi nombre es como está dicho y escrito JOSE LIBOS SAAD, de las condiciones civiles antes anotadas.-*

*SEGUNDO: Manifiesto que actuo en calidad de representante legal de INVERSIONES LIBOS Y CIA LTDA S. EN C., identificada con el Nit. 860.076.034-7 y propietaria del inmueble ubicado en la carrera 7ª No. 84-91 y Calle 85 No. 7-13/16 de esta ciudad.-*

*Que de acuerdo con lo certificado por el Departamento administrativo de Planeación Distrital, los planos correspondientes al proyecto aprobado mediante licencia de construcción No. 0339 del 07 de abril de 1954, no se encontraron.*

*Que las construcciones que se levantaron en el inmueble corresponden con lo existente en el inmueble y con lo aprobado por el Distrito en dicha época.*

*Que las áreas construidas y los usos del proyecto arquitectónico aprobado en la mencionada licencia corresponden a lo reflejado en los planos que se adjuntan.*

"(...)"



Continuación de la Resolución No No 0 2 4 3 5 FEB 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

La veracidad de dicha de declaración se encuentra plenamente desvirtuada por los siguientes hechos confirmados en los conceptos técnicos rendidos dentro del trámite de la revocatoria directa y los documentos de los expedientes que reposan en el archivo de esta Secretaría, así:

- La Licencia de Construcción 3339 de abril 7 de 1954, se concedió para **“construir una estación de servicio de dos pisos y sótano”**<sup>13</sup> (Negritas fuera de texto); no obstante, se observa en cuanto a la volumetría, que en la Licencia de Construcción en la modalidad de Modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005 para el predio de la AC 85 No. 7-13, se aprueban tres (3) pisos habitables y un (1) sótano. De la misma manera, los planos que hacen parte integral de la mencionada licencia dan cuenta de un (1) sótano y tres (3) plantas; así las cosas, la aprobación de la modificación supera la altura de la estructura arquitectónica aprobada por la citada Licencia 3339 de abril 07 de 1954.
- Una vez realizada la revisión de los documentos contenidos en el ON. 4835, con el que se registró la radicación del estudio del proyecto aprobado mediante la Licencia 3339 de 1954, se encontró que en la parte inferior de uno de los formatos de Obras Públicas, se registró un área por edificar de 1.116.14 m<sup>2</sup> (folio 12) que sirvió de base para la determinación del costo de presupuesto que fue de \$167.421=, tomando como precio unitario medio \$1.50. El resultado del costo de presupuesto (\$167.421=) fue registrado con ese valor, al igual que el valor del impuesto de delineación resultado del costo del presupuesto con una deducción de \$3.000=, en la Licencia 3339 de abril 7 de 1954, así como en otros documentos que forman parte del expediente (Memorando No. 4274 de diciembre 11 de 1953), se infiere que el área del proyecto amparado por dicha licencia corresponde a 1.116.14 m<sup>2</sup>, sin embargo, en la Licencia de Construcción en la Modalidad de Modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005 y en el cuadro de áreas del plano 1 de 5 soporte de la misma, se registra como área total construida 2.189.95 m<sup>2</sup>. Es decir, se dio una ampliación del área construida.
- La Licencia 0339 del 7 de abril de 1954, a la que se hace alusión en la declaración juramentada no corresponde de manera alguna al predio AC 85 7-13. La licencia de construcción otorgada para el predio de la AC 85 7-13 es la 3339 del 7 de abril de 1954, en consecuencia, existe una errónea cita en este aspecto en la Licencia de Construcción en la modalidad de Modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005 expedida por el Curador Urbano No. 5 de Bogotá D.C., en los planos anexos de la licencia y en el Acta de Declaración con fines extraprocesales.
- En el certificado expedido por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital del 5 de agosto de 2005 (folio 16 exp 05-5-1753), se constata que el área construida para el predio con

<sup>13</sup> Según se lee en el texto de la licencia obrante al folio 1 del ON 4835



Continuación de la Resolución No No 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

nomenclatura oficial AC 85 7-13 es de 1.295.10 m2 y no de 2.189.95 m2 hecho que contraviene lo declarado por el señor JOSE LIBOS SAAD en su testimonio bajo juramento.

- El reporte de pagos del Impuesto Predial Unificado (Folios 8 y 9 del expediente 05-5-1753), reporta año a año desde 1994 hasta el año 2005 un área construida no mayor de 1.295.1 m2 y no de 2.189.95 m2, hecho que igualmente desvirtúa lo declarado por el señor JOSE LIBOS SAAD.

Así las cosas y teniendo en cuenta que el Curador Urbano 5 de Bogotá D.C. aceptó la declaración del señor JOSE LIBOS SAAD para sustentar los antecedentes de la edificación y para justificar el mantenimiento de la volumetría de la edificación inicialmente aprobada, se presenta en este caso un error de hecho por falso juicio de existencia en la modalidad de falsa apreciación de la prueba, ya que el operador de la norma supone la existencia de un hecho, como es la volumetría de la obra aprobada en primera gestión, a partir de una declaración juramentada, sin tener en cuenta serias evidencias obrantes en el expediente que reposa en el Archivo Central de esta Secretaría y en los documentos de la radicación 05-5-1753 que demuestran que lo manifestado por el señor JOSE LIBOS SAAD no se ajustaba a la realidad.

En efecto, el Curador Urbano 5 de Bogotá D.C., omitió considerar que la Licencia de Construcción 3339 de abril 7 de 1954, se había concedido para "construir una estación de servicio de dos pisos y sótano", lo cual contrastaba claramente con el proyecto sometido a su consideración, pues en el se propusieron tres pisos y un altillo.

Tal y como se expresó en la Resolución aquí recurrida, el Decreto Nacional 1600 de 2005, norma de bajo la cual se tramitó y expidió la Licencia de Construcción en la modalidad de Modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005, exigía en su artículo 21 que si la solicitud de licencia se presentaba ante una autoridad distinta de la que otorgó la licencia original, se debían adjuntar las licencias anteriores, o el instrumento que hiciera sus veces junto con sus respectivos planos, sin embargo, el Curador Urbano omitió este requisito y asumió como prueba de la volumetría y características de la edificación aprobada en primera gestión la simple declaración con fines extraprocesales del señor LIBOS SAAD. No resulta claro entonces, cómo si la modalidad de licencia aprobada era de modificación, no se encuentra dentro de los antecedentes que reposan en la carpeta con radicación 05-5-1753, copia de la primera gestión de la Licencia de Construcción 3339 del 7 de abril de 1954 (ON 4835), en la cual se autorizó la estación de servicio, cuando existe en la carpeta un oficio con 2-2005-27597 de octubre 31 de 2005, expedido por el entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital, en el que se menciona la existencia de tales antecedentes.

Así las cosas, para este Despacho resulta claro que la expedición de la Licencia de Construcción en la modalidad de Modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005 por parte del Curador Urbano 5 de Bogotá D.C., no estuvo sustentada en la acreditación de los antecedentes de la edificación



**Continuación de la Resolución No 0243 5 FEB. 2009**

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

aprobada para el predio en la primera gestión, por lo cual, se asumió que la volumetría no sería ampliada basándose en una simple declaración juramentada, sin embargo, al analizar las pruebas existentes relacionadas en precedencia y al observar las fotos de valla y el pago del Impuesto de Delineación Urbana, resulta obvio que la intención de los solicitantes de licencia no era otra que incrementar el área construida.

De manera que los argumentos del doctor TREBILCOK en cuanto a la inexistencia de pruebas legalmente recaudadas dentro del proceso, no pueden ser acogidas, ya que el medio ilegal se encuentra plenamente acreditado con la infirmación de las manifestaciones realizadas por el señor JOSE LIBOS SAAD en su declaración juramentada.

Debe agregarse que el medio ilegal fue eficaz en la obtención de la licencia de construcción en cuestión, pues de no haber mediado en el trámite la declaración del señor LIBOS SAAD, el Curador Urbano 5 de Bogotá no hubiese procedido a la aprobación del acto administrativo.

Finalmente este Despacho considera que la decisión adoptada por el Secretario Distrital de Planeación Ad-hoc se ajustó a cabalidad al procedimiento establecido en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo y en toda la actuación se garantizó el derecho de defensa y de contradicción de las partes interesadas.

**2.4 En cuanto a la existencia de una Acción Popular.**

En este aspecto, debe tenerse en cuenta que a la luz de lo establecido en el artículo 71 del CCA, la revocación podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.

La Acción Popular que actualmente se adelanta en el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá D.C., no es de conocimiento de la jurisdicción en lo contencioso administrativo por cuanto se trabó entre particulares y no tiene como pretensión la invalidez del acto administrativo contenido en la Licencia de Construcción en la modalidad de Modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005, por lo tanto el trámite de la revocatoria directa de la Licencia de Construcción en la modalidad de Modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005 es procedente.

Por otra parte, el auto al que hace referencia el libelista dictado por la Sala de Decisión Civil del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial, se refiere a la imposición de una medida cautelar y de manera alguna afecta o repercute en la decisión proferida por el Secretario Distrital de Planeación Ad-hoc.

En mérito de lo expuesto,



Continuación de la Resolución No Nº 0 2 4 3 5 FEB. 2009

Por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc. para el predio urbano localizado en la AC 85-7 13 de la Localidad de Chapinero de Bogotá D.C.

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1º.- NEGAR** las pretensiones formuladas en el recurso de reposición interpuesto por el doctor FERNANDO A. TREBILCOK BARVO contra la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007 expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc, por los motivos expuestos en la parte considerativa, en consecuencia se confirma la Resolución 1034 del 26 de diciembre de 2007, expedida por el Secretario Distrital de Planeación Distrital Ad-Hoc.

**ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR** personalmente el contenido de esta Resolución al doctor FERNANDO A. TREBILCOK BARVO, a quien se le advierte que contra ella no procede ningún recurso.



**ARTÍCULO 3º.- REMITIR** copia de la presente decisión y de la totalidad de las actuaciones administrativas surtidas por el Curador Urbano 5 de Bogotá D.C., a la Procuraduría General de la Nación, con el fin que dicho organismo de control adelante las actuaciones de su competencia.

Dada en Bogotá D. C.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

5 FEB. 2009

  
**OSCAR ALBERTO MOLINA GARCÍA**  
Secretario Distrital de Planeación.

Vo. Bo. Beatriz Helena Prada Vargas – Subsecretaria Jurídica.   
Revisó: Clara del Pilar Giner García – Directora de Trámites Administrativos   
Proyectó: César Andrés Consuegra Rincón 